**RESOLUCIÓN MINISTERIAL**



Nº 008-2019-MIMP

1 1 enero 2019

Vistos, la Nota N9 347-2018-CONADIS/PRE de la Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad -CONADIS, el Informe N- 237-2018-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del CONADIS y el Informe N9 221- 2018-CONADIS/DPD de la Dirección de Políticas en Discapacidad del CONADIS;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada mediante Decreto Supremo N9 073-2007- RE, dispone que los Estados Partes están comprometidos a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna, debiendo adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la referida Convención;

Que, asimismo, el numeral 1 del artículo 27 de la citada Convención dispone que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado, en un mercado y un entorno laborable que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad;

Que, en el marco de la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la citada Convención, mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo N9 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad, se modificaron los artículos 50 y 76 de la Ley General de la Persona con Discapacidad y se dispuso en su Primera Disposición Complementaria Final que en MIMP es el encargado de adecuar el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo Ne 002-2014- MIMP al citado Decreto Legislativo;

Que, el artículo 14 de la Ley N9 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, dispone que las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la obligación de realizar consultas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad;

Que, el artículo 12 del Decreto Supremo N9 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N9 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,











establece que previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, estas deben ser difundidas por un plazo no menor de treinta (30) días, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo N9 001-2009-JUS, período en el cual las organizaciones de y para personas con discapacidad formulan las observaciones correspondientes;

Que, a fin de generar efectividad del derecho de consulta de las organizaciones de personas con discapacidad, es necesario publicar el proyecto mediante el cual se modifica el Reglamento de la Ley N9 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N9 002-2014-MIMP, adecuándolo a lo dispuesto en el artículo

1. del Decreto Legislativo N9 1417, a efectos de contar con su participación y opinión sobre la idoneidad de su contenido;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables, de la Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - COIMADIS, de la Secretaría General y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley N9 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N9 29973, la Ley General de la Persona con Discapacidad y modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto o Supremo N9 002-2014-MIMP; en el Decreto Legislativo N9 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en el Decreto Legislativo N9 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto

Disponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica los artículos 3, 52, 57, 67 y 69 del Reglamento de la Ley N9 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N9 002-2014-MIMP, conjuntamente con su Exposición de Motivos en el portal institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP ([www.gob.pe/mimp](http://www.gob.pe/mimp)) y en el portal institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS ([www.conadisperu.gob.pe](http://www.conadisperu.gob.pe)).

Artículo 2.- Plazo

Establecer un plazo de treinta (30) días desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución para recibir aportes, sugerencias y/o comentarios por parte de las organizaciones de y para personas con discapacidad, de las entidades públicas o privadas, así como de las personas naturales interesadas.



Artículo 3.- Presentación

Los aportes, sugerencias y/o comentarios podrán ser presentados en la Mesa de Partes del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, ubicado en Av. Arequipa 375, Santa Beatriz, provincia y departamento de Lima o a través de la dirección electrónica: derechodeconsulta@conadisperu.gob.pe.

Artículo 4.- Responsable

Encargar al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS recibir, procesar y sistematizar los aportes, sugerencias y/o comentarios que se presenten.

Regístrese, comuníquese y publíquese.













<§¥

&

PROYECTO

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP

DECRETO SUPREMO N° -2019-MIMP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 1 del artículo 4 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada mediante el Decreto Supremo N° 073-2007-RE, los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna, a tal fin se comprometen, entre otros, a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la referida Convención;

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú establece, entre otros, que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad;

Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, establece el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Asimismo, se otorgaron una serie de beneficios, tales como, el acceso preferente a los programas públicos de vivienda, la reserva de las vacantes en los procesos de admisión a las instituciones de educación superior, la bonificación en los concursos públicos de méritos y la cuota de empleo, enfatizando los medios que permitan progresivamente su inserción laboral y la implementación de los ajustes razonables que requieran;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad se establecieron disposiciones para promover y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales. Asimismo, entre otros, se modificaron los artículos 50 y 76 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona

con Discapacidad, disponiendo en la Primera Disposición Complementaria Final que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables adecúa el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad a lo dispuesto en el mencionado Decreto Legislativo;

Que, el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, establece como ámbito de su competencia, entre otros, la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad;

Que, los artículos 63 y 64 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, establece, entre otros, que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacldad, con autonomía técnica, administrativa, de administración, económica y financiera y tiene, entre otras funciones, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad;

Que, en ese sentido, el CONADIS ha elaborado el proyecto de modificación del Reglamento de la Ley adecuándolo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad, en lo que respecta a los ajustes razonables para el empleo de las personas con discapacidad y al certificado de la discapacidad;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012- MIMP y modificatorias; en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP y en el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

Modifíquese el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, incorporando los numerales 3.2-A, 3.2-B, y 3.26- A, en los siguientes términos:

"Artículo 3.- Definiciones

(...)





1. A Ayudas técnicas y/o biomecánicas: Son los productos, útiles o equipamientos utilizados para mantener, incrementar o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Incluyen no sólo equipamiento clásico, sino también cualquier herramienta o sistema técnico que permita facilitar la movilidad, manipulación, comunicación, control del entorno y actividades simples o complejas para cualquier aspecto de la vida diaria, la educación o la actividad profesional o social.
2. B Carga desproporcionada o indebida: Es la única limitación para el otorgamiento de los ajustes razonables, esta es aplicable en cada caso concreto y no se basa únicamente en los costos de la adaptación y los recursos financieros disponibles, sino que entran en juego otros factores como sus implicaciones concretas, los efectos sobre el proceso global del trabajo, el tamaño de la empresa, la financiación pública disponible, la duración prevista para el contrato de empleo, los beneficios que potencialmente puedan derivarse de los ajustes en favor de personas distintas a las que formulen tal solicitud, las obligaciones de la empresa de proteger la seguridad y la salud de la persona y de cualquier otra persona que pueda verse afectada así como los derechos y libertades de otros. La carga desproporcionada o indebida no deber ser un pretexto para desconocer la dignidad de la persona con discapacidad."

(...)

"3.26-A Servicios de apoyo: Son los recursos y estrategias en el trabajo que sirven para brindar soporte temporal o permanente al trabajador con discapacidad, de acuerdo a las habilidades y necesidades de la persona, así como los requerimiento específicos del puesto, estos pueden incluir distintas formas de asistencia personal, proporcionando a las personas con discapacidad la ayuda que necesitan para responder apropiadamente a las demandas que requiere la actuación en los distintos contextos; reducen así la distancia existente entre las competencias de la persona y las necesarias para actuar en los diversos entornos en los que se desenvuelve, facilitando su participación."

Artículo 2.- Modificación del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

Modifíquese el artículo 52 en su numeral 52.1 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002- 2014-MIMP, en los siguientes términos:

"Artículo 52.- Ajustes razonables para personas con discapacidad en los procesos de selección

1. La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR emite los lineamientos para realizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad en los procesos de selección, comprendiendo la adecuación de la metodología, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos de entrevista; así como las condiciones adecuadas para el acceso y permanencia en los ambientes donde se desarrollan las etapas del proceso, garantizando su seguridad y el mayor nivel de independencia posible. Para tal efecto, considera los requerimientos y necesidades de los postulantes con discapacidad, sujetándose a los principios contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En caso del sector privado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emite los respectivos lineamientos, considerando lo dispuesto en el presente artículo."

(...).

Artículo 3.- Modificación del artículo 57 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General 'e la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

¡¡S\

Modifíquese el artículo 57 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, en los siguientes términos:

"Artículo 57.- Ajustes razonables para el empleo de las personas con discapacidad

1. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece mediante resolución ministerial, los Lineamientos para los ajustes razonables para la persona con discapacidad en el lugar de empleo, para el sector público y privado, comprendiendo la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo cambios en el espacio físico, provisión de ayudas técnicas, servicios de apoyo; así como los ajustes en la organización de trabajo y los horarios, considerando los requerimientos y necesidades del trabajador con discapacidad, a efecto de facilitar su acceso, desplazamiento y permanencia en el puesto de trabajo.

Dichos lineamientos comprenden, adicionalmente, el empleo con apoyo, el acceso a los programas de entrenamiento, capacitación, actualización laboral para los programas de ascenso, entre otros.

1. En el caso de Lima Metropolitana, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo presta asesoramiento y orientación a los empleadores públicos y privados para la implementación de los ajustes razonables a las personas con discapacidad en el lugar de empleo.

En el caso de las demás regiones, el asesoramiento y orientación a los empleadores públicos y privados se encuentra a cargo de las Direcciones Regionales de Trabajo."

Artículo 4.- Modificación del artículo 67 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

Modifíquese el artículo 67 en sus numerales 67.1 y 67.2, e incorpórense los numerales 67.3, 67.4 y 67.5 al Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, en los siguientes términos:

"Artículo 67.- Certificación de la persona con discapacidad



1. El Certificado de Discapacidad es el único documento que acredita la condición
de persona con discapacidad. La persona con discapacidad interesada en obtener la
certificación de la discapacidad debe solicitarlo en las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud - IPRESS, certificadoras de la discapacidad del ámbito público,
privado o mixto, en forma personal o mediante sus padres, tutores, representantes
legales o apoyos designados.

Para el caso de las personas con discapacidad institucionalizadas en albergues,
orfanatos o asilos, en caso lo deseen o requieran, la solicitud puede ser realizada por
un representante de la institución.

1. El proceso para la certificación de la discapacidad comprende la evaluación,
calificación y certificación propiamente. La evaluación es financiada por las
Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS a la que
esté afiliada la persona con discapacidad. La evaluación, calificación y certificación
son gratuitas.

Las personas con discapacidad tienen derecho a una afiliación prioritaria al Sistema Integral de Salud (SIS) en aquellos casos en que no se cuente con un seguro de salud.

1. Las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD), atienden las demandas de certificación solicitadas por las Direcciones Regionales de Salud, Gerencia Regional de Salud y la Dirección de Redes Integradas de Salud, o quien haga sus veces, en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de formulada la solicitud.
2. Las personas con discapacidad que presenten deficiencias evidentes o congénitas son certificadas una vez constatada la deficiencia por el médico certificador de la discapacidad. La constatación comprende únicamente la evaluación médica sin la necesidad de exámenes auxiliares que lo corroboren.
3. La Dirección Regional de Salud, la Gerencia Regional de Salud, la
Dirección de Redes Integradas de Salud o quien haga sus veces, realiza una
evaluación preliminar para determinar qué especialidad médica se requiere
para la certificación; de tal manera que el Ministerio de Salud pueda disponer
el recurso humano necesario para la atención de las Brigadas Itinerantes
Calificadoras de Discapacidad (BICAD)."

Artículo 5.- Modificación del artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de
la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

Modifíquese el artículo 69 en su numeral 69.1 del Reglamento de la Ley N° 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-

MIMP, en los siguientes términos:

"Artículo 69.-Verificación de autenticidad del Certificado de Discapacidad

1. La(s) entidad(es) ante la(s) que se realice un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa, quedan obligadas a verificar de oficio o a pedido de parte la autenticidad de los certificados de discapacidad. El Ministerio de Salud brinda la respectiva información en el plazo máximo de 7 días hábiles respecto de los Certificados emitidos por las IPRES públicas, privadas o mixtas a las entidades que lo soliciten, a fin de verificar su autenticidad, con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales."

(...)

Artículo 6.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y la Ministra Salud.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA Única.- De las facultades de los/las curadores/as

El certificado de discapacidad puede ser solicitado por los/las curadores/as de las personas con discapacidad hasta que culmine la transición al sistema de apoyos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los días del mes de del

año



DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, APROBADO POR EL DECRETO

SUPREMO N° 002-2014-MIMP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas es el instrumento de carácter internacional que sitúa la discapacidad en el plano de los derechos humanos. En atención a ella, las políticas públicas que los Estados Partes adopten deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad; efectuando las modificaciones y adaptaciones que garanticen su participación plena en todos los aspectos de la vida en comunidad.

El Estado peruano ha suscrito la referida Convención, por lo cual forma parte del derecho interno, conforme a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, siendo por ello de cumplimiento obligatorio, resultando exigible al Estado trabajar con miras a realizar medidas de acción positiva y políticas de no discriminación; así como adaptar el ordenamiento jurídico al contenido de la citada Convención; en ese sentido, se demanda que los Estados Partes adopten medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, inclusión social y participación plena en todos los aspectos de la vida, organizando y ampliando servicios y programas, en particular en los ámbitos de salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.

El artículo 7 de la Constitución Política del Perú prescribe que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene el derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. En ese sentido, el Estado peruano asume la obligación de adoptar medidas afirmativas adecuadas para reducir las desventajas estructurales y dar un trato preferente y apropiado que se condiga con los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, a fin de afirmar y fortalecer su plena participación en la sociedad en condiciones de igualdad y no discriminación.

En el marco de la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole previstas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado peruano aprobó el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad, que tiene por objeto establecer disposiciones para promover y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Es así que mediante el referido dispositivo legal, se modificó el artículo 50 y 76 de la Ley \ N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, referente a los ajustes razonables y el certificado de discapacidad.

La Primera Disposición Complementaria Final establece la adecuación del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, a efecto que sea concordante con las disposiciones previstas por el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad.

Es así que mediante el presente Decreto Supremo se estima conveniente modificar los artículos 3, 52, 57, 67 y 69 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona

con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, a efecto de procurar la armonización normativa entre las disposiciones de la Ley y su respectivo Reglamento.

En ese orden de ideas, para un mejor entendimiento de las disposiciones normativas, se ha previsto incorporar las definiciones siguientes:

1. Ayudas técnicas en el lugar de empleo,
2. Carga desproporcionada o indebida; y
3. Servicios de apoyo en el lugar de empleo, coadyuvando a la implementación adecuada de las regulaciones.

Los ajustes razonables se definen como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Son una parte intrínseca del deber de no discriminación y, por tanto, se aplican a todos los derechos1.

En ese sentido, mediante el artículo 50 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad se dispone que los ajustes razonables comprenden tanto los procesos de selección y el lugar de empleo. En atención de ello, se estima conveniente la modificación del artículo 52 y 57 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

En relación al artículo 52, referente a los ajustes razonables para personas con discapacidad en los procesos de selección, se propone que la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR emita los lineamientos para otorgar ajustes razonables a las personas con discapacidad en los procesos de selección en el sector público, comprendiendo la adecuación de la metodología, procedimientos e instrumentos de (¿valuación y métodos de entrevista.

7A modo de referencia, conforme a la normativa internacional, en Ecuador se obliga a las instituciones públicas y privadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo para facilitar la participación de las personas con discapacidad2. Del mismo modo, en Chile se establece que las entrevistas y pruebas de selección deben ser accesibles para las personas con discapacidad, incorporando ajustes de acceso a la información, aplicando evaluación por competencias, juegos de roles, entre otras metodologías que respondan a las características del postulante con discapacidad; además, se debe garantizar que no se excluyan inadvertidamente a las personas con discapacidad3.

En esa línea, considerando que la obligación de realizar ajustes razonables es una \ obligación ex nunc (desde ahora), lo que significa que estos son exigibles desde el %

> 1

§1

d/1 NOTA: Ver Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, elaborado en el 34° período de sesiones, del 27 de febrero al 24 de marzo de 2017.

1. Artículo 50 de la Ley Orgánica de Discapacidades.
2. Orientaciones sobre procesos de gestión de recursos humanos inclusivos. SENADIS Chile.

momento en que una persona con una deficiencia los necesita en una determinada situación (lugar de trabajo) para disfrutar de su derecho o derechos en igualdad de condiciones en un contexto particular4, se ha estimado oportuno establecer que los ajustes razonables se otorgan considerando los requerimientos y necesidades de los postulantes con discapacidad, permitiéndoles rendir las evaluaciones en igualdad de condiciones que los demás.

En vista de ello, a efecto de brindar los ajustes razonables necesarios al postulante con discapacidad, tanto las entidades públicas como las empresas privadas, deben consignar en sus fichas de postulación un rubro que permita señalar los ajustes razonables que requiera durante el proceso de selección; de tal manera que rinda sus evaluaciones en igualdad de condiciones que los demás postulantes.

Adicionalmente, considerando que la persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás al entorno físico (...), los Estados deben contribuir a la creación de una cadena sin restricciones que permita a una persona desplazarse de un espacio a otro, y también dentro de un espacio en particular, sin barreras5. En ese sentido, se propone que los precitados lineamientos contemplen las condiciones de accesibilidad, permitiendo el acceso, permanencia y desplazamiento de las personas con discapacidad en los ambientes donde se desarrollan las etapas del proceso, garantizando su seguridad y el mayor nivel de independencia posible, concordando con las disposiciones del artículo 15 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Para el caso del sector privado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emite los respectivos lineamientos, considerando las regulaciones descritas precedentemente.

Ahora bien, en relación a los ajustes razonables en el lugar de empleo, a efecto que exista concordancia entre la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad; y el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, se estima conveniente modificar el numeral 57.1 del artículo 57 del citado Reglamento, estableciendo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regula los ajustes razonables para la persona con discapacidad en el lugar de empleo para el sector público y privado.

En relación a la regulación propuesta, se debe precisar que en el caso del sector público, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha emitido la Resolución Ministerial N° 284-2018-TR, que conforma el Grupo de Trabajo “Mesa de Trabajo para el otorgamiento de ajustes razonables en el lugar de trabajo de las personas con discapacidad en el sector público”, el cual está integrado por representantes de dicho sector, SERVIR y CONADIS. Dicho grupo viene coordinando, articulando y consensuando la propuesta de lineamientos, conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

4 Observación General sobre el artículo 9: accesibilidad del 11° Período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 30 de marzo al 11 de abril de 2014.

5 Observación General sobre el artículo 9: accesibilidad del 11° Período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 30 de marzo al 11 de abril de 2014.

En lo concerniente a los ajustes razonables para el sector privado, el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo ha emitido la Resolución Ministerial N° 127-2016-TR, que aprueba
la Norma Técnica para el diseño, implementación y ejecución de ajustes razonables para
el empleo de personas con discapacidad en el sector privado y el formato de solicitud de
ajustes razonables, la cual ya contempla los supuestos desarrollados en el Decreto
Legislativo N° 1417.

Ahora bien, se debe precisar que mediante el Decreto Legislativo antes indicado, se

modificó el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, señalando que la única excepción para el otorgamiento de los ajustes
razonables es la “carga desproporcionada o indebida” y no excesiva como estaba antes de
la modificación de la Ley. Es por ello, que en la propuesta de modificación del numeral
57.1, se consigna el término “carga desproporcionada o indebida”, lo que permitirá una
armonización normativa.

En lo concerniente al numeral 57.2 del artículo 57 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP referente al asesoramiento para la adecuada implementación de los ajustes
razonables en el lugar de empleo, por parte de las entidades públicas, se ha considerado
que el CONADIS, en su calidad de órgano especializado en cuestiones relativas a la
discapacidad; y las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad -
OREDIS, prestan el asesoramiento y orientación para la implementación de los ajustes
razonables en el lugar de empleo.

Por otro lado, se señala que mediante el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo
que promueve la inclusión de las personas con discapacidad, se modificó el artículo 76 de
la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que desarrolla cuestiones
relativas a la certificación de la discapacidad.

Sobre el particular, el certificado de discapacidad es el documento médico legal que
acredita la condición de persona con discapacidad6; en ese sentido, se propone modificar
el artículo 67 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, señalando que el mencionado documento puede ser solicitado por la
persona con discapacidad interesadas o en su defecto, el padre, tutor, representante legal
o el apoyo designado en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS,
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos que
realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o
rehabilitación; y servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen
por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o
rehabilitación de la salud. Dichos establecimientos se encuentran inscritos en el Registro
Nacional de IPRESS y cuentan con al menos un médico certificador de la discapacidad,
quien emite los respectivos certificados.

N0TA: Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad, probada mediante Resolución Ministerial N° 981-2016/MINSA.







El proceso de certificación comprende 3 etapas: evaluación7, calificación8 y certificación9, lo que ha sido consignado en el citado articulado, precisándose que la evaluación es financiada por las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, entidades públicas, privadas o mixtas, que reciban, capten y/o gestionen fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad. Son IAFAS las siguientes:

* Seguro Integral de Salud
* Seguro Social de Salud (EsSalud), excluyendo la cobertura de prestaciones económicas y sociales.
* Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).
* Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
* Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
* Empresas de Seguros contempladas en los numerales 1, 2 y 3 del inciso d) del artículo 16° de la Ley 26702, que oferten cobertura de riesgos de salud de modo exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas.
* Asociaciones de Fondos Regionales y Provinciales Contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT).
* Entidades de Salud que ofrecen servicios de salud prepagadas.
* Autoseguros y fondos de salud, que gestionen fondos para la cobertura de salud de modo exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas.

Por su parte, la calificación y certificación se realizan de manera gratuita.

En el caso de las personas que no cuenten con un seguro de salud, el Ministerio de Salud promueve su afiliación a una IAFA; para tal efecto, se ha consignado que el personal de salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS evalúa el caso específico, con la finalidad de orientar su afiliación aquella que le corresponda. Es así que en caso no se logre su respectiva afiliación, la evaluación, calificación y certificación se realiza, de manera gratuita, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS certificadoras del Ministerio de Salud.

En lo concerniente a la certificación inmediata para los casos de deficiencias evidentes o congénitas, el Ministerio de Salud ha establecido que la certificación procede al contrastarse la deficiencia por el médico certificador de la discapacidad, sin la necesidad de exámenes auxiliares que lo corroboren.

7 NOTA: Consiste en el procedimiento médico por el cual se evalúa la capacidad anatómica y funcional de una persona, en base al examen clínico con el apoyo de exámenes de ayuda al diagnóstico necesario, para determinar el diagnóstico de daño, etiología, deficiencias, limitaciones en la actividad y restricción en la participación de las personas con discapacidad.

8 NOTA: Consiste en el procedimiento técnico - médico y administrativo mediante el cual se establece la gravedad de la discapacidad y el porcentaje de restricción en la participación.

9 NOTA: Consiste en el procedimiento médico y administrativo para la emisión del certificado de discapacidad.

En lo que respecta a la atención de la demanda de certificación por parte de las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad - BICAD10, se ha considerado que la Dirección Regional de Salud, la Gerencia Regional de Salud, la Dirección de Redes Integradas de Salud o quien haga sus veces, realicen una evaluación preliminar para determinar qué especialidad médica se requiere para la certificación; de tal manera que el Ministerio de Salud pueda disponer el recurso humano necesario para su atención por parte de las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD).

Finalmente, en relación a la verificación de la autenticidad del certificado de discapacidad se ha establecido que el Ministerio de Salud brinde la información de los certificados de discapacidad que se encuentran registrados en su aplicativo web, en un plazo máximo de 20 días hábiles. En el caso de los certificados de discapacidad que no se encuentren registrados en el referido aplicativo, el Ministerio de Salud deberá solicitar la información a la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPRESS pública, privada o mixta que haya emitido el certificado.

ANALISIS COSTO - BENEFICIO

La política de modernización del Estado procura generar condiciones necesarias para el bienestar de todos los ciudadanos así como su desarrollo integral, especialmente de los sectores menos favorecidos. Por ello, el Estado debe reducir las desventajas estructurales a las que se enfrentan las personas con discapacidad, mediante políticas públicas orientadas en un régimen legal de protección; bajo dicho ámbito, se plantea la modificación del Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, estimando conveniente señalar:

En relación al otorgamiento de los ajustes razonables, se debe precisar que mediante su
regulación, tanto en los procesos de selección v en el puesto de empleo, se procura revertir
las cifras del desempleo de la población con discapacidad. El INEI señala que solamente
el 19% de las personas con discapacidad que tienen más de 14 años trabajan, el 3% son
desempleados (buscan trabajo y no encuentran) mientras que el 78% restantes es inactivo.
Con relación a los ingresos de quienes trabajan, el 44% recibe menos de SI. 750
mensuales, el 23% entre SI. 750 y SI. 1,199 y el 29% SI. 1,200 o más. Es decir, de las
personas con discapacidad que trabajan, el 67% recibe sueldos menores a SI. 1,200
soles11.

Se debe precisar que el otorgamiento de los ajustes razonables (proceso de selección y
lugar de empleo) encuentra correlato con las disposiciones de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma que prevé que los Estados Parte
(como el caso del Perú) debe adoptar las medidas necesarias que permita velar porque se
realicen los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Mediante los ajustes

& razonables, se pretende suprimir o reducir las barreras, adaptando la manera existente de

10 NOTA: Grupo de médicos rehabilitadores y/o especialistas que se desplazan a una región para apoyar el proceso de evaluación, calificación y certificación de la discapacidad.

1 Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad. INEI 2012.



hacer las cosas o suprimiendo las barreras físicas en el lugar de trabajo allí donde sea necesario y viable12.

En esa línea, los ajustes razonables permiten que, al estar acondicionado el ambiente para una persona con discapacidad, ésta pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Es así que se presume que la competencia es, en un inicio, desigual por las distintas situaciones en las que se encuentran las personas con discapacidad, con todas las circunstancias que promueven su vulnerabilidad. Los ajustes razonables pretenden que estas diferencias no afecten la competencia que estas personas puedan presentar en el mercado, y, de esta manera, competir en igualdad de condiciones. Y es que, como ha sostenido Marcela Rodríguez, “[l]a distribución desigual de los instrumentos constituye una condición necesaria para el cumplimiento de la igualdad [...], no podemos esperar que la mera igualdad abstracta de oportunidades sea capaz de asegurar la igualdad de resultados”13.

Determinados trabajadores pueden encontrarse con barreras para acceder al empleo o ascender o permanecer en él debido a factores tales como el entorno físico en el lugar de trabajo o el modo en el que se organiza el trabajo. Con los ajustes razonables se pretende suprimir o reducir esas barreras adaptando la manera existente de hacer las cosas o suprimiendo las barreras físicas en el lugar de trabajo allí donde sea necesario y viable, como sustituir escaleras por rampas con el fin de facilitar el acceso a quienes utilicen sillas de ruedas.

En ese sentido, se estima conveniente señalar que el costo de los ajustes razonables recae en el empleador, debiendo indicar que la mayor parte de los ajustes razonables no entrañan costos significativos. Según un estudio de la Job Accommodation NetWork de los Estados Unidos, el 58 % de los empleadores notificaron que los ajustes solicitados no tenían ningún costo14.

Ahora bien, se estima conveniente indicar que la aplicación de los ajustes razonables presenta como excepción la carga desproporcionada o indebida, debiendo señalar que depende de cada caso, y no se basa únicamente en los costos económicos de la adaptación, los recursos financieros disponibles; sino que entran en juego factores como: sus implicaciones concretas, los efectos sobre el proceso global del trabajo, el tamaño de la empresa, la financiación pública disponible, la duración prevista del contrato de empleo, los beneficios que potencialmente puedan derivarse de los ajustes para personas distintas a las que formulan la solicitud, las obligaciones de la empresa de proteger la seguridad y la salud de la persona y de cualquier otra persona que pueda verse afectada así como los derechos y libertades de otros15.

12 Lograr la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad a través de legislación. Directrices. Oficina Internacional del Trabajo. Suiza. 2014. Pág. 18.

13 NOTA: Visto en: <http://usmp.edu.pe/IDHDES/pclf/cuadernos/Las> Medidas Afirmativas.pdf. Pág. 20 (13/12/2018).

14 Lograr la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad a través de legislación. Directrices. Oficina Internacional del Trabajo. Suiza. 2014. Pág. 27.

15 Lograrla igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad a través de legislación. Directrices. Oficina Internacional del Trabajo. Suiza. 2014. Pág. 42.

A este respecto, se debe precisar que al considerar si son razonables los ajustes que se proponen, es importante que el empleador distinga entre los elementos esenciales y no esenciales de un empleo. En cualquier empleo existen funciones esenciales que son indispensables para el desempeño de la función16, en este punto es donde se brindan los ajustes razonables; y si la tarea es no esencial, el empleador quizás la podría reasignar a otros trabajadores.

Por otro lado, es importante señalar que proporcionar ajustes razonables constituye una medida esencial para promover la diversidad en el lugar de trabajo, y existen casos cada vez más numerosas que evidencian que la diversidad puede mejorar el rendimiento y la competitividad de una empresa. Por ejemplo, la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT reúne a una diversidad de empleadores que voluntariamente se han comprometido a fomentar el empleo de personas con discapacidad17; constituyéndose en una buena práctica empresarial.

Entre los beneficios de contratar a una persona con discapacidad, se puede señalar los siguientes: las personas con discapacidad suelen tener una rotación menor en el mercado laboral, lo cual evitará costos de inducción futuros a la empresa o entidad pública; además, de tener una productividad por encima del promedio18.

Cabe precisar que la normativa nacional contempla que los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría tienen una deducción adicional en el cargo del impuesto a la renta sobre los gastos por ajustes razonables para personas con discapacidad. En ese sentido, el gasto que acarré la aplicación de los ajustes razonables, encuentra equilibrio en la deducción adicional en el cargo del impuesto a la renta sobre los gastos que se realicen por los ajustes razonables.

Se debe señalar que la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad proporciona un sólido marco contra la discriminación y aporta un elemento innovador, al considerar que la denegación de ajustes razonables es una forma de discriminación; en ese sentido, el referido concepto es una parte intrínseca del deber de no discriminación y, por tanto, se aplican a todos los derechos. En consecuencia, la denegación de ajustes razonables en relación con cualquier derecho constituye una discriminación por motivos de discapacidad19.

En esa línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General N° 5 (1994), relativa a las personas con discapacidad, consideró que la denegación de ajustes razonables por motivos de discapacidad era una forma de discriminación que afectaba de manera general a todos los derechos reconocidos por el Pacto Internacional. En el ámbito europeo, este concepto se reconoció en el artículo 5 de

16 NOTA: A efecto de determinar cuáles son las funciones esenciales del puesto, se puede revisar el contrato laboral o el reglamento Interno de trabajo.

Carta de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT. Ver el siguiente vinculo:

<?/ <http://www.businessanddisability.org/index.php/> en/about-the-network/charter

18 Stein 2003. Págs. 104-106

19 Observación General sobre el artículo 9: accesibilidad del 11° Período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 30 de marzo al 11 de abril de 2014.



la Directiva N° 2000/78/CE de la Unión Europea, limitándose al ámbito del empleo, y se ha prestado a interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En vista de lo expuesto, la normativa nacional contempla mediante el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad que la denegación de ajustes razonables constituye un acto de discriminación.

Por otro lado, en lo concerniente a la regulación de la certificación de la discapacidad, se debe precisar que el certificado de discapacidad es el documento médico legal que acredita la condición de personas con discapacidad. Para la emisión del mismo, se debe realizar la certificación20 en sus 3 etapas (evaluación, calificación y certificación) ante una Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPRESS certificadoras de la discapacidad. Precisándose que la evaluación clínica, que conlleva a la realización de exámenes clínicos, se encuentra solventada por las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, por lo que no generará un costo adicional a erario nacional.

En relación a la calificación y certificación, se advierte que dichos procedimientos son de carácter técnico - médico y administrativo, por lo que su realización no implica gasto alguno, correspondiéndole al médico certificador su realización.

Cabe precisar que el Ministerio de Salud cuenta con un Programa Presupuestal 0129 denominado “Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad”, que contempla como producto “Personas con discapacidad certificadas en establecimientos de salud”, recibiendo dicha población atención de salud especializada para acreditar la condición de persona con discapacidad, a través de la evaluación, calificación y posterior certificación de discapacidad. Se debe señalar que para el presente año, dicho producto cuenta con un presupuesto de S/2 381 534 soles para el presente año.

Respecto a las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad son conformadas por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública a través de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad en coordinación con los Institutos Especializados y hospitales, a solicitud de las Direcciones de Salud de los Gobiernos Regionales y/o Gerencia Regional de Salud para los casos que requieran evaluación especializada. Las Sanidades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, y Seguro Social de Salud - EsSalud, podrán conformar Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD) a través de sus procedimientos institucionales.

Dichas Brigadas tienen por finalidad suplir el vacío de médicos especializados en las diversas regiones del país, para realizar el proceso de certificación de la discapacidad; de tal manera que movilizan los recursos humanos especializados al lugar donde se requiere.

Previo al desplazamiento de la Brigada, Los médicos especialistas o médicos cirujanos generales de la región que lo solicita realizarán la primera evaluación de los expedientes de las personas solicitantes, que contienen la historia clínica y las evaluaciones especializadas solicitadas; identificadas las necesidades de certificación, se procederá al desplazamiento de la Brigada dotada de los recursos humanos adecuados (tipo de especialidad de cada médico), a efecto que culminen con el proceso de certificación.

20 NOTA: Procedimiento médico y administrativo para la emisión del certificado de discapacidad.

Es importante señalar que los gastos que irroguen la participación de las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad serán asumidas por la institución solicitante, sin demandar recursos adicionales.

Finalmente, se resalta que el certificado de discapacidad es el único documento que acredita que una persona se encuentra en dicha situación y le permite ejercer todos los derechos reconocidos en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; por tal motivo, es de suma importancia que el proceso de certificación se realice teniendo en cuenta el principio de celeridad.

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN

NACIONAL

Con el presente Decreto Supremo se modifica el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP, en lo que concierne a su artículo 3, incorporando los numerales 3.2-A, 3.2-B y 3.26-
A; modificando el numeral 52.1 del artículo 52, los numerales 57. 1 y 57.2 del artículo 57,
los numerales 67.1 y 67.2 del artículo 67, e incorporando los numerales 67.3, 67.4 y 67.5
del artículo 67; así como, modificando el numeral 69.1 del artículo 69 del precitado
Reglamento.

El impacto de la modificación del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad es positivo, toda vez que no colisiona con ninguna disposición
normativa del ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, mediante dicha modificación se
procura la armonización de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,

modificada por el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la
inclusión de las personas con discapacidad y el Reglamento de la citada Ley General de la
Persona con Discapacidad, efectivizándose los alcances de las normas antes señaladas.







